



# Los nuevos retos de la integración latinoamericana



**Sergio Díaz-Granados\***

CAF, Banco de Desarrollo de América Latina

---

*La reconstrucción pospandemia es una oportunidad única para emprender un nuevo y mejor camino orientado al cumplimiento de las metas de la Agenda 2030. Este tendrá que ser más verde, más ambicioso, contar con una institucionalidad sostenible y resiliente y adoptar una mirada a largo plazo.*

En 1970, cuando nacía la Corporación Andina de Fomento (CAF), en América Latina se consideraba la integración como una herramienta para acompañar los procesos de industrialización nacionales a través del fomento del comercio intrarregional y la creación de un mercado común en el marco del Pacto Andino.

Desde entonces, numerosas iniciativas de integración han surgido en América Latina y el Caribe, creando un andamiaje de instituciones que, bajo el *leitmotiv* de la integración, conocieron éxitos y fracasos, acompañando a nuestra región en sus momentos de mayor auge, y también durante los periodos de crisis.

---

\* Presidente Ejecutivo de CAF -Banco de desarrollo de América Latina-

Tiene una amplia trayectoria en el servicio público y privado, tanto a nivel nacional como internacional, con especial énfasis en temas de desarrollo e integración regional. Previo a asumir la presidencia de CAF, se desempeñó como director ejecutivo para Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo. Anteriormente ejerció los cargos de ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, viceministro de Desarrollo Empresarial y presidente del Directorio de Bancóldex y ProColombia. Fue congresista y presidente del Comité de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes de Colombia.

51 años después, la región sigue buscando concretar su integración comercial y financiera, acompañada del desarrollo de infraestructura que facilite cruzar las fronteras físicas y administrativas de nuestros países. 51 años después, CAF también pasó de ser una Corporación Andina de Fomento formada por 6 países, a un Banco de Desarrollo de América Latina, conformado por 19 países, que se ha convertido en un actor clave para el desarrollo y la integración latinoamericana.

Si bien los desafíos que planteaba la integración regional en los años sesenta siguen plenamente vigentes, en los últimos años han surgido nuevos retos que requieren repensar el papel de nuestras organizaciones regionales para enfrentarlos. Los organismos multilaterales tienen un papel clave a la hora de abordar el rompecabezas de una integración regional que, en el contexto actual marcado por la pandemia, será determinante para lograr una recuperación económica a medio y largo plazo, alineada con las metas de la Agenda 2030.

El mundo comienza a recuperarse de los devastadores efectos de la pandemia generada por la COVID-19. Tras su paso por América Latina, este virus dejó a nuestros países más débiles, más pobres y más endeudados. La pandemia ha golpeado a América Latina como ninguna otra región: cuenta solo con

el 8% de la población mundial, pero ha puesto el 30% de los muertos. La pandemia nos hizo retroceder en términos de avances para alcanzar los **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible** y hace más duro el camino al cumplimiento de la Agenda 2030.

Pero además de la urgencia de recuperar el crecimiento económico y atender a los sectores más golpeados por la pandemia, la región enfrenta otros desafíos históricos que marcarán su desarrollo en las próximas décadas. El cambio climático y la protección de nuestra frágil y rica biodiversidad son, sin lugar a duda, dos retos de gran repercusión. Los efectos del cambio climático traspasan las fronteras administrativas de nuestros países y requieren de un actuar colectivo y concertado para combatirlos. La conservación del ecosistema de la Amazonía, por ejemplo, un espacio compartido por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela es una buena muestra de ello. Otro ejemplo lo encontramos en la alta vulnerabilidad climática existente en el corredor seco centroamericano que se extiende desde Chiapas, en México, hasta el noroeste de Costa Rica, pasando por El Salvador, Honduras y Nicaragua, y afecta la seguridad alimentaria de los centroamericanos.

A pesar de que América Latina es solo responsable del 12,5% de emisiones a nivel global, es una de las regiones que se verán más perjudicadas por

el efecto del calentamiento global. Los modelos climatológicos indican que el aumento de la temperatura del planeta provocará, por poner solo algunos ejemplos, una reducción de lluvias en la Patagonia, Brasil central, el Caribe y Centroamérica; aumento de los ciclones tropicales; aumento del nivel de los océanos; aumento de sequías que impactará en la producción agrícola, o incremento entre climas extremos (sequías a inundaciones y de temperaturas muy altas a temperaturas muy bajas).

Ante esta realidad, necesitamos pasar a la acción. Desde CAF estamos comprometidos con convertirnos en el banco verde de América Latina, y promoveremos el crecimiento verde y la economía circular a través de un mejor posicionamiento y financiamiento de proyectos ambientales forestales, hídricos, climáticos, gestión de residuos, eficiencia energética y agricultura sostenible. Estimamos que nuestras operaciones en financiamiento verde pasen del 26% actual al 40% en 2026. La recuperación económica debe ser necesariamente verde, digital y centrada en las personas en América Latina.

Vivimos en un mundo en el que existe una desconexión profunda entre las actividades humanas y la capacidad de nuestro planeta para absorber nuestro modo de vida, como lo señalan las conclusiones del último informe del Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Revertir esta tendencia requiere esfuerzos colectivos y concertados a nivel local, nacional, regional y a nivel global. Para hacer más sostenible nuestra forma de vivir, nuestra región necesita consolidar una gobernanza regional, gobernanza en la que las instituciones multilaterales tienen un papel central en el acompañamiento de la región.

Los efectos del cambio climático traspasan las fronteras administrativas de nuestros países y requieren de un actuar colectivo y concertado para combatirlos.

Si en el pasado CAF nació para convertirse en el brazo financiero que acompañara a los países del Pacto Andino, CAF tiene el deber hoy de acompañar la construcción de un Pacto Verde para nuestra región que permita enfrentar los desafíos de la urgente acción climática, el reto de la integración física y productiva de nuestra región, el de la integración digital y por último el reto de la década de acción orientada al cumplimiento de la agenda de desarrollo que tanto nos costó construir durante el decenio pasado.

## El reto pendiente de la integración física y productiva en nuestra región

América Latina y el Caribe pierde en las cadenas logísticas gran parte de la productividad debido a ineficiencias y falta de coordinación. La actual brecha de infraestructuras de América Latina plantea una gran oportunidad para dar un salto cualitativo, por esta razón, CAF ha apostado por el fomento de corredores logísticos de integración mediante intervenciones sistémicas en infraestructura, servicios y gobernanza en puertos, áreas metropolitanas, pasos fronterizos, clústeres productivos, ejes de interconexión modal, entre otros. En los últimos 20 años, CAF ha financiado más de 70 proyectos de integración por 10.000 millones de dólares y ha movilizado 18.000 millones más de otras entidades a través de su rol catalítico.

En los últimos 30 años, nuestra región ha registrado grandes avances en materia de apertura comercial, tanto a través de acuerdos comerciales regionales como de acuerdos de asociación con países extrarregionales. Sin embargo, estos avances no se han traducido ni en un peso sustancialmente mayor de la participación en el comercio global, ni han permitido incrementar los intercambios a nivel intrarregional como ha sucedido en otras regiones del planeta.

CAF comenzó en 1972 a financiar proyectos de infraestructura para la integración, con la construcción del puente sobre el Río Limón para mejorar la conectividad entre Venezuela y Colombia. La región hoy en día sigue necesitando puentes, túneles y rutas, pero necesita también conectividad digital, eléctrica y verdaderos corredores logísticos que acompañen la integración física y de servicios y la creación de cadenas regionales de valor.

El más reciente [Reporte de Economía y Desarrollo de CAF](#), publicado en noviembre de 2021, muestra que América Latina y el Caribe ha avanzado sustancialmente en la reducción de aranceles y de barreras no arancelarias. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para avanzar en una integración comercial. El reporte señala que nuestra región requiere trabajar en la disminución de los costos aduaneros y de fronteras, además de procurar mejoras sustantivas en la infraestructura que facilite la integración física entre los países.

Esta infraestructura resulta vital para el transporte de mercancías, pero también para otros bienes, como la energía, donde la ventaja de la cercanía geográfica desempeña un rol central en la facilitación del intercambio y será clave para el transporte de energías futuras como el hidrógeno verde. En efecto, en América Latina los costos logísticos representan entre el 16%

y el 26% del Producto Interno Bruto, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos están entre el 8% y el 9%.

Asimismo, nuestra región debe adoptar regulaciones domésticas y regionales (por ejemplo, normas de origen, o incentivos a la Inversión Extranjera Directa Vertical) que promuevan la integración productiva entre las economías, estimulando la participación de las empresas en cadenas regionales y globales de valor como ha sucedido en el sudeste asiático o dentro de la Unión Europea.

La banca de desarrollo tiene el deber de acompañar a la región en la adopción de medidas asociadas con la facilitación del comercio, la inversión en infraestructura y la integración productiva para construir un camino pragmático hacia una mayor integración de las economías tanto a nivel regional como global.

## Hacia una integración digital

América Latina también necesita cerrar las brechas en digitalización. Sólo 4 de cada 10 hogares cuentan con una conexión de banda ancha fija y los accesos individuales a Internet móvil no superan el 50% de la población. La brecha de acceso también tiene una expresión en los hogares de bajos ingresos, zonas rurales y algunas zonas urbanas donde persisten asimetrías

significativas en la cobertura y asequibilidad a los servicios digitales.

La configuración de un mercado digital latinoamericano —con más de 600 millones de potenciales consumidores— permitiría aumentar la conectividad de las personas y las empresas, facilitaría el intercambio de bienes y servicios en línea y contribuiría al desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental. La integración puede permitir también impulsar medidas como la eliminación del roaming entre países, como lo ha hecho la Unión Europea y como desde 2020 lo han hecho Argentina y Chile.

A pesar de los beneficios económicos y sociales, el debate sobre el mercado digital regional recién comienza y todavía queda mucho camino por recorrer para articular conjuntamente los desafíos políticos y regulatorios que permitirían explotar todo su potencial. En este sentido, las trabas para la creación de un mercado digital regional tienen que ver con la falta de coordinación en materia de estándares y regulación y con carencias en infraestructura y transporte.

Por eso, será necesario mejorar las infraestructuras digitales, crear un clima emprendedor de servicios y de aplicaciones digitales y que empresas e individuos adopten las nuevas tecnologías. Según un informe de CAF, el Mercado Único Digital posibilitaría el libre movimiento de bienes, servicios digitales y capital vinculado a la industria

digital, ofrecería servicios fácilmente accesibles con normativas compatibles entre países, establecería un esquema intrarregional de libre competencia -sin restricciones o barreras arbitrarias- y garantizaría la protección del consumidor y de los datos personales, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia.

La pandemia ha conllevado la destrucción de millones de empleos, ha limitado el acceso a la salud y a la educación, y ha profundizado las desigualdades en nuestra región.

Más allá de algunos acuerdos aduaneros celebrados por entidades subregionales en materia de aranceles, la mayoría de las iniciativas actuales en favor de un mercado digital regional apuntan a recolectar, analizar y compartir información, redactar guías, o debatir desafíos actuales e intercambiar las experiencias de los distintos países a nivel regional.

## Una década de acción de cara al cumplimiento de la Agenda 2030

A nivel mundial, uno de cada tres fallecidos por causa de la COVID-19 es latinoamericano y la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe estima que el Producto Interno Bruto per cápita de nuestra región volvió a los niveles de 2010. En tiempos de crisis, los indicadores sociales se ven deteriorados de manera durable. La pandemia ha conllevado la destrucción de millones de empleos, ha limitado el acceso a la salud y a la educación, y ha profundizado las desigualdades en nuestra región. Esta situación golpea particularmente a los colectivos vulnerables, que ya antes tenían limitaciones para acceder a educación y salud de calidad y a empleos formales, y que contaban con pocas redes de protección social. La pandemia ha llevado de vuelta a la pobreza a una parte de la clase media vulnerable de la región y **gran parte de ella son mujeres.**

Esta crisis mostró también los límites de la gobernanza regional y del multilateralismo para enfrentar desafíos comunes y llevó a nuestros países a un repliegue en sí mismos.

Numerosos países de la región verán mermados sus avances en varios de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible; aquellos que hicieron grandes inversiones en estímulos y ayudas económicas lograron suavizar el impacto de la crisis. La recuperación de los indicadores sociales cuando se retome la senda del crecimiento económico será lenta dado que tienen una reacción asimétrica a **la volatilidad del crecimiento económico.** Como resultado, la trayectoria de

cumplimiento de la Agenda 2030 -relativamente bien encaminada hasta entonces- se está viendo alterada.

La reconstrucción es un esfuerzo colectivo y debe estar orientada a la consolidación de un crecimiento durable e inclusivo. En ese contexto, el papel de CAF y de la banca multilateral de desarrollo es indispensable para atender las necesidades inmediatas de los países de la región, apalancando financiamiento y acompañamiento. Este acompañamiento es vital también para movilizar financiamiento privado, ya que la acción de los gobiernos por sí solos no es suficiente para lograr su cumplimiento.

La movilización de recursos hacia los países de América Latina y el Caribe es esencial para una pronta reactivación y la región tiene una oportunidad histórica para definir las grandes líneas comunes de lo que debe ser una recuperación verde e inclusiva.

El segundo reto a la luz del legado de la pandemia nos debe conducir a construir un mejor multilateralismo y una mejor gobernanza que nos permita enfrentar futuros choques de manera ágil y coordinada.

## La urgencia de la acción climática

Preocupa de manera especial la situación del Caribe y de sus territorios insulares cuyas economías dependen en gran medida del turismo y que

enfrentan episodios cada vez más frecuentes de desastres naturales producto del calentamiento global.

El coste de no actuar para revertir la tendencia puede llegar a costarle a algunos países de la región hasta el 20% del PIB a largo plazo. Estamos frente a un problema urgente y que requiere una acción coordinada y de manera inmediata.

El desafío que plantea el cambio climático sobrepasa además nuestras fronteras administrativas y las capacidades de nuestros Estados de actuar por sí solos. En efecto, nuestra región cuenta con una riqueza única en materia de biodiversidad. Esta biodiversidad es una fuente importante de recursos de toda índole cuyo equilibrio requiere ser preservado para garantizar su existencia en el tiempo y permitir la continuidad de importantes actividades económicas de manera sostenible. Resulta en efecto difícil por ejemplo promover una gestión responsable de la Amazonía sin que todos los países que la comparten actúen de manera coordinada. Lo mismo sucede en lo que respecta a las fuentes de agua binacionales, a las zonas protegidas compartidas, con los océanos o el aire. En efecto, nuestra región comparte un espacio común que necesita atención y cuidado de manera colectiva para mantener los frágiles equilibrios medioambientales. El multilateralismo, y los espacios de diálogo que este permite construir, es clave para construir una gestión

compartida de lo que nuestra región por naturaleza comparte.

La integración y la cooperación entre latinoamericanos es más que nunca vital para poner fin a la pobreza, proteger nuestro planeta y garantizar la paz y la prosperidad.

Por otro lado, nuestra región requiere invertir con fuerza en la transición energética para lograr en un corto plazo, esperamos antes del horizonte 2050, la neutralidad de carbono. América Latina y el Caribe necesita, en primer lugar, una transición energética con carácter inclusivo y que *no deje a nadie atrás*. Esto pasa por atender las necesidades de electrificación, en especial en el mundo rural, en invertir en electromovilidad y mejorar los servicios públicos como el del transporte, reduciendo la contaminación, promoviendo el uso de transporte público y desarrollando circuitos de economía circular en actividades que tendrán que reinventarse.

Asimismo, esta transición energética debe apoyarse constantemente en la tecnología para modernizar y hacer más eficiente la producción eléctrica, de manera particular cuando se trata de la generación energía hidroeléctrica,

que necesita modernizarse para ser aún más eficiente. Pero la tecnología puede también permitir asegurar una mejor distribución, interconexión, almacenamiento y la digitalización de los sistemas en búsqueda de una eficiencia que nos lleve a un mayor equilibrio. Al respecto, la interconexión, que puede existir también entre países, permite importar electricidad a mejor precio en momentos de escasez reduciendo el precio de mercado, y exportar excedentes de energía cuando hay mayor producción. También facilita la incorporación de una mayor parte de energías renovables a las redes y proporcionan mayor seguridad de suministro reduciendo el riesgo de no poder atender la demanda en los momentos de *peak* de consumo. Para ello, la integración energética es clave.

Por último, para avanzar con la transición energética, nuestra región requiere estabilidad institucional y una mirada de largo plazo. Ese papel estructurador puede ser impulsado por organismos regionales de integración para permitir seguir generando incentivos y condiciones económicas para apoyar el desarrollo de energías verdes.

La movilización del financiamiento verde es clave para la mitigación y la adaptación al cambio climático a través de proyectos en temas ambientales, forestales, agua, climáticos, gestión de residuos, eficiencia energética y agricultura sostenible, entre otros, que permitan fortalecer la resiliencia y sostenibilidad.



Por último, las instituciones multilaterales, y en particular aquellas que le pertenecen a nuestra región, como CAF, tienen que jugar un papel fundamental para difundir la voz de nuestro continente en los foros y espacios globales. Desarrollar una estrategia común de incidencia a nivel global permitirá tener un mayor peso en la definición de las reglas globales que guiarán nuestra convivencia a nivel internacional.

Una agenda de desarrollo sostenible baja en carbono requiere de actores multilaterales fuertes, tanto en el plano político como financiero, que se centren de manera pragmática en los desafíos comunes que tiene nuestra región. Debemos estar en medida de construir e impulsar un Pacto Verde que incorpore tanto a los actores públicos y a los actores privados, como a las empresas o las organizaciones de la sociedad civil.

El “Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas” que acogió Argentina el pasado 8 de septiembre de 2021 con el propósito de pensar en conjunto la protección del ambiente, los medios innovadores para su implementación y las medidas para mejorar la adaptación y la resiliencia en los países del continente mostró que existe el compromiso y la consciencia de la urgencia de actuar de manera coordinada de parte de los principales líderes de nuestra región para hacer frente a estos problemas comunes. Mostró también que compartimos todos un gran continente, en

el que la biodiversidad circula libremente entre nuestros océanos Atlántico, Pacífico y Antártico.

El Pacto Verde que necesita América Latina requiere de un brazo financiero fuerte y ágil que debe actuar de manera coordinada y complementaria junto a otros actores por el bien común de nuestra región.

En un contexto de recuperación económica pospandemia, las decisiones que hoy tomemos tendrán implicancias decisivas para nuestras próximas generaciones. Por ello, conscientes de que debemos actuar, en los próximos cinco años CAF tiene la ambición de acompañar de manera determinada la agenda de sostenibilidad ambiental de nuestra región.

La reconstrucción a través de un Pacto Verde es una oportunidad única para emprender un nuevo y mejor camino orientado al cumplimiento de las metas de la Agenda 2030. Éste tendrá que ser más ambicioso, contar con una institucionalidad sostenible y resiliente y adoptar una mirada a largo plazo. Así reconstruiremos economías con fundamentos sólidos, tanto en el plano económico como social, que permitan proteger a la región y a sus ciudadanos ante futuros choques.

La integración y la cooperación entre latinoamericanos es más que nunca vital para poner fin a la pobreza, proteger nuestro planeta y garantizar la paz y la prosperidad.